

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **MATILDE EUGENIA RICARDO GARCÍA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.), y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A) tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-015-2021-00130-01.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECT S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada ANYTA CAMILA MOSQUERA BETANCOURT portadora de la T.P. 340.503 del C. S. de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta. Así mismo se le reconoce la abogada LAURA LÓPEZ ÁLVAREZ portadora de la T.P. 365.499 del C. S. de la Judicatura, para representar a PROTECCIÓN S.A. como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante

RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora, que nació el 12 de noviembre de 1968, y que se afilió al ISS hoy COLPENSIONES desde el 1º de enero de 1995, posteriormente se trasladó al RAIS por medio de la AFP PORVENIR S.A. el 28 de septiembre de 1995, y después se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A. el 1º de agosto de 2001.

Aduce que PORVENIR S.A. al momento del traslado le brindó información sobre las ventajas del RAIS, pero en ningún momento le informó sobre las desventajas del mismo, no le informó sobre las características, condiciones y diferencias frente al RPM, así mismo indica que PROTECCIÓN S.A. al momento del traslado no le brindó la información adecuada y completa acerca del RAIS, pues al momento de la afiliación le brindó información sobre las ventajas del RAIS, pero en ningún momento le informó sobre las desventajas del mismo, ni le informó sobre las características, condiciones y diferencias frente al RPM.

Señala que PROTECCIÓN S.A. omitió brindarle la información suficiente, adecuada y completa acerca del RAIS, sin que pudiera la actora tener un comparativo de las ventajas y desventajas de uno y otro régimen, sin considerar su edad y perfil de riesgo, cuando estaba ella en el límite de la edad en que debió trasladarse a COLPENSIONES y conforme a su situación laboral e ingresos en concreto era suficientemente claro el riesgo de estar afiliada a un fondo privado.

Manifiesta que radicó reclamación administrativa ante COLPENSIONES solicitando la nulidad del traslado a la AFP y reactivación de la afiliación en el RPM, a lo que respondió que no era viable, así mismo envió derecho de petición a PROTECCIÓN S.A. solicitando la anulación de la afiliación.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS y ordenando en consecuencia a la AFP PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante con sus rendimientos. En igual sentido ordenó a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES los rendimientos financieros generados durante el tiempo que la actora permaneció afiliada en dicho fondo, argumentado que en cuanto a las cuotas de administración solo es procedente

su devolución solo en los eventos en que estos se piden como una pretensión en la demanda.

Seguidamente condenó a COLPENSIONES a recibir las anteriores sumas de dinero, y a activar la afiliación de la demandante en el RPM de forma permanente y sin solución de continuidad.

Para fulminar condena, la *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional que se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes pensionales, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen, y la inversión de la carga de la prueba de la información brindada en cabeza de las AFP.

Luego, señaló que en el proceso no se probó por parte de las AFP que, al momento de la afiliación de la demandante, hayan cumplido con el deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado, la suscripción del formulario de afiliación preimpreso, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado.

Finalmente, declaró no probada la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, condenó en costas a PROTECCIÓN S.A, y a PORVENIR S.A y absolvió de las mismas a Colpensiones.

3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por los apoderados de PORVENIR S.A y COLPENSIONES.

APELACIÓN DE PORVENIR S.A.

El apoderado de PORVENIR S.A. apela la sentencia, solicitando al Tribunal que la revoque, indicando que no comparte la decisión de primera instancia consistente en declarar la ineficacia del traslado realizado por la parte demandante, manifestando como principal motivo el hecho de que PORVENIR S.A. no logró demostrar dentro del proceso que a la parte demandante se le informó con relación a su afiliación al RAIS, porque aun cuando se conoce la jurisprudencia de la CSJ, que ha establecido que es carga de las AFP traer pruebas al proceso que constante esa información, lo cierto es

que no pueden aplicar de manera indiscriminada ese precedente de establecer obligaciones que legalmente no eran exigibles a PORVENIR S.A. para el momento del traslado inicial de la demandante, ya que para ese momento solamente constaba la obligación de brindar la información de manera verbal, sin que constara la obligación de dejar documento adicional al formulario de afiliación que constatará esa información, puesto que el único documento exigible para la época era el formulario de afiliación, los documentos adicionales al mismo solamente surgieron con posterioridad a partir de la Ley 1748 de 2014.

Manifiesta que a través del interrogatorio de parte brindado por la demandante, se pudo evidenciar que a la misma se le brindó información con respecto a su afiliación y con relación a características particulares del RAIS, pues se le explicó específicamente la diferencia en la forma del funcionamiento del RAIS con el RPM, y se le informó sobre la posibilidad de pensionarse anticipadamente, de generar unos rendimientos y de solicitar una devolución de saldos en caso de no cumplir con los requisitos para pensionarse al momento de llegar a la edad para ello, razón por la cual se puede evidenciar que la parte demandante tenía conocimiento con relación al funcionamiento del RAIS y su decisión fue plenamente informada.

Expone que a través de los actos de relacionamiento que ejecuto la parte demandante durante el transcurso de su vinculación al RAIS, la misma constato su deseo inequívoco de seguir permaneciendo afiliada al RAIS, pues teniendo la posibilidad de retornar a COLPENSIONES no hizo uso de esta facultad, sino que realizó traslados horizontales dentro del RAIS, constatando con ello su deseo de permanencia dentro del mismo.

Señala que en caso de que el Tribunal confirme lo atinente a la declaratoria de la ineficacia del traslado, solicita se revoque el numeral tercero donde se establece la obligación de devolver los rendimientos durante el tiempo en que estuvo afiliada la demandante, pues PORVENIR S.A. no cuenta con ninguna suma de dinero dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, pues la totalidad de las sumas de dinero que reposan en dicha cuenta fueron debidamente trasladadas a PROTECCIÓN S.A. donde se encuentra vinculada actualmente la demandante.

APELACIÓN DE COLPENSIONES.

El apoderado de COLPENSIONES solicita al Tribunal recuperar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia, indicando que con el efecto de la decretoria

de la ineficacia lo que se pretende es retrotraer las cosas al estado anterior, y que si el Tribunal ratifica y aprueba los hechos de la demanda y que la ineficacia del traslado fue ocasionado por la conducta indebida de las AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., en lo referente a las cuotas de administración y demás rubros de la cuenta de ahorro individual, solicita al Tribunal que se condene o aclare que dichas AFP deben trasladar a COLPENSIONES además del saldo de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos generados, también los gastos de administración, la devolución de bonos pensionales, las sumas adicionales de la aseguradora, el porcentaje destinado al pago de seguros previsionales y las sumas dinerarias que corresponden a los descuentos efectuados para la garantía de pensión mínima debidamente indexados por todo el periodo en el cual la demandante permaneció afiliada a dichos fondos privados.

Lo anterior por cuanto son dichas AFP quienes tienen el deber de asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es las mermas sufridas en el capital destino a la financiación de la pensión de vejez, ya sea por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual o por los gastos de administración en los que hubieren incurrido las administradoras, los cuales deben ser asumidos por ellas mismas con cargo a su propio patrimonio, ello atendiendo el inciso 2º del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, el cual establece la distribución de los porcentajes de cotización de los afiliados al RAIS, indicando que el 3% del IBC será destinado a financiar los gastos de administración, la prima de reasegurados de fogafin y la prima de los seguros de invalidez y sobrevivientes, con fundamento en la sentencias SL 17595 de 2017, y la 31989 de 2008 del CSJ donde se considera que las administradoras tienen el deber de devolver al sistema todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil.

Señala que a lo largo del proceso se logra constatar que el actuar de COLPENSIONES ha sido de buena fe, y se concluye que, en el evento de ser aprobados los hechos de la demanda, la condena total debe recaer sobre los fondos privados que conllevaron al traslado de régimen pensional para la demandante.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales de la parte DEMANDANTE, de PROTECCIÓN S.A y de COLPENSIONES allegaron escrito de alegatos de conclusión, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.

Es procedente declarar la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, como quiera que en el proceso las entidades demandadas no lograron demostrar que se otorgó una información clara y completa, respecto de las desventajas y ventajas que el traslado le reportaría a la demandante, pues como se evidencia el único documento que se aportó respecto a la información dada fue la copia del formulario de afiliación, quedando así, demostrado que las administradoras de los fondos de pensiones demandados faltaron al deber legal impuesto en el literal d del artículo 60 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, que hacen referencia a la obligación de los fondos de suministrar una información suficiente, amplia y oportuna respecto del traslado con el fin de generar decisiones informadas, que el artículo 12 de la ley anteriormente nombrada además preceptúa que la misma se debe brindar a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

ALEGATOS DE PROTECCIÓN S.A.

Teniendo en cuenta las recientes sentencias en segunda instancia que ha emitido el Tribunal Superior de Distrito adicionando a las declaraciones de ineficacia, la devolución o pago de reaseguros o FOGAFÍN, y previendo que ocurra lo mismo en el proceso de la referencia, mi representada expone las razones por las cuales no es procedente:

En primer lugar, la figura de reaseguro es un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora (cedente) pasa a ser asegurado de otra entidad aseguradora (reaseguradora), contrato que **no se configuro durante la vigencia de la afiliación de la parte demandante a mi representada**, por lo que no hay efecto alguno que retrotraer para el caso concreto. Adicionalmente, no existen en los cobros realizados por Protección, como gastos de administración a título de reaseguros durante la vigencia de la afiliación de la parte demandante, ya que como se expuso, es una figura distinta a la establecida en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, que fija que tanto en el Régimen de Prima Media como en el de Ahorro Individual el 3% del IBC de los afiliados al Sistema General de Pensiones se destina a pagar la comisión de administración y el seguro previsional para financiar las pensiones de sobrevivencia y/o invalidez.

En segundo lugar, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – **FOGAFÍN** es una autoridad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

encargada de proteger los ahorros de los ciudadanos depositados en bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades especializadas en **depósitos electrónicos (SED PES)** que, por obligación, están inscritos en **FOGAFÍN**.

Ahora bien, es fundamental recordar que el **FOGAFÍN** dentro del Sistema General de Pensiones surge a partir del art. 99 de la Ley 100 de 1993 que estipula lo siguiente:

“ARTÍCULO 99. GARANTÍAS. Las administradoras y aseguradoras, incluidas las de planes alternativos de pensiones, deberán constituir y mantener adecuadas garantías, para responder por el correcto manejo de las inversiones representativas de los recursos administrados en desarrollo de los planes de capitalización y de pensiones.

Las administradoras deberán contar con la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos, para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendimientos, y de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales correspondientes a cotizaciones voluntarias. Las garantías en ningún caso podrán ser inferiores a las establecidas por la Superintendencia Bancaria para las instituciones del régimen Financiero”.

En concordancia con lo anterior, el seguro de Depósitos que es manejado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, se encuentra regulado en la actualidad por la Resolución 05 de 2009, norma que derogó la regulación anterior contenida en la Resolución 01 de 2009. La Resolución 1 de 2009 derogó, a su turno, las Resoluciones 1 de 1988, 2 de 1989, 2 de 1991, la 2 de 1992, 2 de 1993, 2 de 1996, 1 de 1997, 1 de 1998, 2 de 2000, 5 de 2000, 3 de 2001, 2 de 2005, 1 de 2006, y los numerales I y II y el Anexo I de la Circular Externa número 007 de 2002.

No obstante la derogatoria de la citada Resolución 01 de 2009, el parágrafo del artículo 20 de la Resolución 05 de 2009 dispone que dicha Resolución 01 continuará rigiendo para efectos de la devolución de primas y cobro de prima adicional de los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las sociedades de capitalización, correspondientes al año 2009, así como, para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos relacionados con ellas. **Nótese que, en ningún contenido de dicha resolución, se mencionan las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías,** obedeciendo esto a lo que más adelante estipularía el artículo 163 de la Ley 1450

del 16 de junio de 2011, la cual dispuso la eliminación de la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las Aseguradoras de inscribirse en el FOGAFÍN, ordenando además el traslado de las reservas existentes al Tesoro Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas, así:

“ARTÍCULO 163. Garantía de Fogafín y Fondo de Garantía de Pensión

Mínima. *Elimínese la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las Aseguradoras de inscribirse en el Fogafín. Las reservas existentes se trasladarán al Tesoro Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas”.*

En los anteriores términos, una eventual sentencia por este rubro estaría ordenando a PROTECCIÓN el traslado a Colpensiones de un **concepto completamente derogado por la normatividad que lo regula, y que además por disposición normativa fue girado al tesoro nacional, y asumido por la propia Administradora desde su estipulación en el artículo 99 de la Ley 100 de 1993, y que NUNCA SE DESCONTÓ DE LA COTIZACIÓN A PENSIÓN DE LOS AFILIADOS**, estando así completamente infundado dicho concepto.

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

Cabe resaltar, que conforme lo estipulado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993: “(...) Después de un (1) año de la vigencia de la presente Ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez (...)”.

Teniendo en cuenta que el 12-05-2021 (fecha de la admisión de la demanda, con la que pretende se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado), la demandante contaba con 52 años, en consideración a que nació el 12-11-1968, deviene entonces la imposibilidad de trasladarse de régimen, según la normativa citada en líneas precedentes.

Cuando se declara la nulidad y/o ineficacia del traslado (según se advierte en las sentencias CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL 17595-2017, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, rad. 56174) hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es

decir: i) Recursos cuenta individual de ahorro, ii) Cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) Rendimientos, iv) Anulación de Bonos Pensionales v). Porcentaje destinado al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de declarar la ineficacia de la afiliación al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS (AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.) y consecuentemente se ordene la afiliación o reactivación de la afiliación al RPMPD hoy a cargo de COLPENSIONES, solicito respetuosamente al honorable tribunal superior de Medellín - Sala Laboral, tener presente al momento de proferir la sentencia, lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en donde se estableció el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, con el cual se establecen dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental y por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio; el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros.

En consecuencia y en aplicación al artículo antes mencionado, la declaración injustificada de la ineficacia del traslado de un afiliado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la reactivación de su afiliación, afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados. Así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia T-489 de 2010

Ahora, en cuanto al tema de la información brindada por el fondo al momento de realizar el traslado sería prudente entrar a valorar la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado y no imponerles a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen.

Finalmente y en atención a lo anteriormente expuesto y si es decisión del despacho conceder las pretensiones de la demandante, solicito respetuosamente tener en cuenta que Colpensiones como Administradora del Régimen de Prima Media, fue un tercero ajeno al contrato celebrado entre la señora MATILDE EUGENIA RICARDO GARCÍA, y la AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.; por lo cual solicito respetuosamente no haya condena alguna para la entidad que represento, como también solicito de manera respetuosa condenar a la AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., a entregar a Colpensiones el total de los valores cotizados y/o

depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses y cualquier otro concepto a consideración del Despacho.

Con fundamento en lo anterior, solicito de manera respetuosa al H. Tribunal que, al momento de proferir sentencia, reevalúe los hechos que dieron lugar al presente proceso, así como los testimonios presentados, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PORVENIR S. A. y COLPENSIONES, se consultará la sentencia en favor de esta última entidad por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a las afiliadas o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

Es así como, en el presente asunto, está probado, que la actora, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, según historia laboral que reposa a folios 23 a 28 del expediente (Documento 07 del

expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS PORVENIR S.A. el 28 de octubre de 1995 como se anota en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 82 del expediente (Documento 05 del expediente digital), con efectividad al 1º de octubre de 1995 como se indica en el certificado SIAFP que milita a folio 80, posteriormente se trasladó a la administradora PROTECCIÓN S.A. el 06 de junio de 2001 como se advierte en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 66 del expediente (Documento 08 del expediente digital), con efectividad al 1º de agosto de dicha anualidad conforme se advierte en el certificado de SIAFP.

De otra parte, en este caso, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1º de abril de 1994 con 35 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que PORVENIR S.A. en el año 1995 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:17:18 del video de la audiencia de conciliación y trámite (documento 17 del expediente), no se advierte que, esta haya confesado que al momento de su traslado de régimen se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son la explicación clara de las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, conforme lo señaló la *a quo*, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probaron las AFP, siendo su carga, como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de la *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1995 cuando se trasladó del RPM administrado en ese momento por ISS hoy COLPENSIONES a la AFP PORVENIR S.A.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, encuentra la Sala que la orden impartida por la *a quo*, no se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, y por tal razón, como lo argumentó Colpensiones la devolución que debe realizar PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES deberá incluir la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole

Igualmente PORVENIR S.A., debe devolver a Colpensiones los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que la actora estuvo afiliada a esta AFP, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiesen recibido las AFP demandadas como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación dla actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Así mismo al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o **de una buena gestión en la administración del bien**, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de las AFP demandadas, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, la que acarrea como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir con su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Ahora, en lo que concierne al aspecto de los alegatos de PROTECCIÓN S.A., sobre la posible orden de devolución del porcentaje del reaseguro de Fogafín, que se pueda preferir en esta instancia, es preciso indicar que sobre el reaseguro Fogafín, se refiere el Art. 7 de la ley 797 de 2003, que modificó el original Art. 20 de la ley 100 de 1993, que dispuso en su Inc. 3 lo siguiente:

*“En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, **la prima de reaseguros de Fogafin**, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.” (negrilla agregada)*

Ahora el artículo 99 de la original Ley 100 de 1993, dispuso que fueran las administradoras y aseguradoras quienes la cubrieran con sus propios recursos, sin embargo, la ley 797 de 2003 es posterior y podría interpretarse como modificatoria del 99 de la original Ley 100 de 1993, lo que pudiera llevar a concluir que el reaseguro FOGAFIN al menos hasta cuando estuvo vigente respecto de los Fondos de Pensiones, se tenía como un porcentaje que se debía pagar del 3% de la cotización, destinada a financiar “los gastos de administración, **la prima de reaseguros de Fogafin**, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.” Como expresamente lo estableció el citado Art. 7 de la ley 797 de 2003 y en tal sentido no se entendería como un seguro que pagaban las Administraras de Pensiones, de su propio patrimonio, sino con cargo al porcentaje de 3% antes citado y por ello la orden de devolución de la cotización debe incluir el porcentaje del reaseguro Fogafín, al menos mientras hubo la obligación de tomar le mismo, pues se repite se pagaba con cargo al citado 3% a que hace mención el Art. 7 de la ley 797 de 2003.

De otra parte, la obligación de la garantía de FOGAFÍN, fue eliminada para las Administradoras de Cesantías y a las de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por virtud de lo dispuesto en el Art. 163 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, sin embargo la orden que se pueda proferir en una sentencia de devolución del porcentaje del reaseguro FOGAFÍN, debe entenderse que es el evento que dicha garantía o reaseguro hubiera podido ser cubierta con la cotización de la afiliada durante el tiempo que estuvo vinculada al RAIS y mientras estuvo vigente dicha obligación para las administradoras de pensiones del RAIS, sin que la orden de devolución de la cotización en ningún caso supere el 100% de la misma. Por manera que, si de la cotización de la actora no se efectuó en alguna época, o en todo el tiempo de la afiliación, ningún descuento para cubrir el reaseguro o garantía de Fogafín, no tendría por qué hacer devolución alguna de este concepto, por lo que, en todo caso, la devolución, es solo del 100% de la cotización, sin descuento de ninguna índole.

En el caso de la demandante, nótese que como ya se indicó, se afilió a PORVENIR S.A. el 28 de octubre de 1995 con efectividad al 1º de octubre de 1995, y posteriormente se trasladó a PROTECCIÓN S.A. el 06 de junio de 2001 como se con efectividad al 1º de agosto de dicha anualidad, por lo que respecto del reaseguro Fogafín, en sus distintos momentos se deben aplicar las preceptivas de la original Ley 100 de 1993, la modificación de Art. 7 de la ley 797 de 2003 y desde el 16 de junio de 2011 lo preceptuado en el Art. 163 de la Ley 1450 de este mismo año, por lo que no le asiste razón a la apoderada de PROTECCIÓN S.A, sobre que no se profiera orden de reintegro del porcentaje del reaseguro Fogafín, pues durante estuvo vigente, tenía

relación con la cotización que pagaba el afiliado, pues finalmente de su importe se realizaba el pago, independientemente que la Administradora de Pensiones, entendiera que era de su participación en la cotización de la denominada cuota de administración.

En lo atinente, a la solicitud de la apoderada de COLPENSIONES en el recurso de alzada en el sentido que sumas devueltas por las AFP del RAIS referentes a las sumas adicionales de la aseguradora, el porcentaje destinado al pago de seguros previsionales y descuentos efectuados para la garantía de pensión mínima sean devueltos debidamente indexados, ha sido postura de esta sala, que si tal indexación se reclamó en la contestación de la demanda o cuando menos, en el recurso de apelación, resulta improcedente su decisión en la sentencias de segunda instancia, pues fue un asunto que las partes tuvieron la oportunidad de debatir en el proceso, por lo menos en los alegatos de segunda instancia.

Así las cosas, respecto de la indexación del porcentaje de la referida cuota de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, esta Sala considera que es procedente, por cuanto este porcentaje de las cotizaciones no fue abonadas a la cuenta de ahorro pensional de la demandante, por lo que no devengaron los rendimientos o intereses pues fueron apropiados por PROTECCIÓN S.A. o gastados para los pagos de las primas, y por ello debe ser devuelto indexado.

Al respecto la jurisprudencia de la CSJ de la que se citan las sentencias SL1688 de 2019 SL 2932 de 2020, SL 3202, 3571, 3706, 3707, 3708, 3709 y 3769 de 2021, la CSJ ha ordenó que las cuotas de administración fueran devueltas indexadas, por lo que le asiste razón a Colpensiones en este aspecto, de la apelación, por lo que se ordenará en esta instancia, que las referidas cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima sean devueltas indexadas.

Respecto de la afirmación que realiza la apoderada de COLPENSIONES en sus alegatos sobre la imposibilidad legal de traslado de régimen, derivada de la restricción temporal impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifico el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, cuando le falten al afiliado menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, es palmario que tal prohibición, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende la demandante, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

De otra parte, sobre la teoría de los actos de relacionamiento, alegados por PORVENIR S.A. referentes al traslado de la actora entre distintas AFP del RAIS, que denotarían su voluntad de pertenecer al RAIS, teoría expuesta por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 413-2018, ha de tenerse en cuenta que dicha Sala de descongestión no tiene la facultad para variar la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte, habiéndose pronunciado ya esta Corte en su Sala permanente en el sentido que tales actos de relacionamiento, no pueden ser fundamento para negar la ineficacia del traslado de régimen pensional, pues la falta al deber de asesoría se debe estudiar al momento de traslado y no en relación con actos posteriores a este.

Al respecto esto, precisó la SCL de la CSJ en la Sentencia SL5686-2021:

“Ahora, en este punto la Corte no pasa inadvertido que el Tribunal concluyó que el traslado fue voluntario pues la actora se afilió a otras administradoras del mismo régimen pensional, lo cual respalda Colpensiones bajo la teoría de los actos de relacionamiento que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer en el RAIS y, a su vez, la recurrente critica al indicar que el estudio de la acción de ineficacia debe centrarse simplemente en el cumplimiento del deber de información en el traslado inicial, sin que la afiliación misma suponga que ello se acató.

Pues bien, la postura del Tribunal es contraria a la que ha adocinado la Corte en su jurisprudencia, que sobre este punto tiene un carácter consolidado y reiterado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021). En estas providencias se ha señalado claramente que una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, el acto no se convalida por los tránsitos que los afiliados hagan entre administradoras privadas de este esquema.”

Ahora, en lo concerniente a los argumentos expuestos por la apoderada de COLPENSIONES en el escrito de alegatos, que la declaratoria de ineficacia desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, se ha de manifestar primeramente, que para efecto de declarar la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, no es jurídicamente viable tener en cuenta el principio antes citado, pues, desde que la actora estuvo afiliada al RPM era beneficiaria de las prerrogativas de este régimen pensional, conforme lo disponía la legislación, y por ello no es posible desconocer los derechos que tiene conforme las norma legales vigentes, so pretexto de someterse al principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, pues a este principio el que se tiene que someter es el legislador al realizar las reformas pensionales, no que el juez para desconocer derechos ya legislados.

De otra parte, el hecho que la actora regrese al RPM, de COLPENSIONES, no necesariamente le va a causar una carga financiera a esta entidad o mejor a los recursos del fondo común de los afiliados, por un mayor monto de la pensión en el RPM, pues el monto de la pensión de vejez, tanto en el RAIS como en el RPM depende de muchas situaciones de hecho ciertas y de voluntad de la afiliada, que no están plenamente probadas en ese proceso, pues si un afiliado al RAIS decide hacer vida marital o casarse con una persona muy joven o tener hijos a avanzada edad cuando está a punto de obtener la pensión de vejez, ello necesariamente influirá en que el monto de la pensión en el RAIS sea reducido, o si por ejemplo en el RPM por azar el afiliado pierde el empleo que le irrogaba un buen salario y no puede seguir cotizando como independiente con el IBC en los últimos 10 años, el valor de su pensión se va a ver menguado.

Pero, es más, eventualmente pudiera suceder que un afiliado al RPM, fallezca sin que tengan beneficiarios que legalmente puedan acceder a las prestaciones de sobrevivientes y en tal caso, los dineros de sus cotizaciones, queden en el fondo común de COLPENSIONES. También puede acontecer que el afiliado no alcance a obtener la pensión de vejez, sino la indemnización sustitutiva, la que es evidentemente inferior al monto de las cotizaciones con sus rendimientos. Igualmente puede suceder que el afiliado alcance a obtener la pensión de vejez, y fallezca sin tener beneficiarias de una pensión de sobrevivientes, y que los dineros con los que contribuyó al fondo común no se hayan agotado, caso en el cual el saldo no utilizado queda perteneciendo al fondo común, lo que no pasa en el RAIS, pues los dineros deben ser entregados a los herederos.

En lo que tiene que ver con lo pedido por la apoderada de COLPENSIONES en la apelación y en sus alegatos de segunda instancia, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor de la actora, ello no es procedente, toda vez que al ser ineficaz la afiliación de la demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado su devolución se debe realizar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES.

Finalmente en la apelación de PORVENIR S.A., se expresa que en caso de que el Tribunal confirme lo atinente a la declaratoria de la ineficacia del traslado, solicita se revoque el numeral tercero donde se establece la obligación de devolver los rendimientos durante el tiempo en que estuvo afiliada la demandante, pues PORVENIR S.A. no cuenta con ninguna suma de dinero dentro de la cuenta de ahorro

individual de la demandante, pues la totalidad de las sumas de dinero que reposan en dicha cuenta fueron debidamente trasladadas a PROTECCIÓN S.A. donde se encuentra vinculada actualmente la demandante.

Sobre el anterior asunto, le asiste razón a PORVENIR S.A., toda vez que se supone que en el año 2001, que la actora se trasladó de esta AFP a PROTECCIÓN S.A. los dineros existentes en su cuenta de ahorro pensional fueron trasladados a PROTECCIÓN S.A. incluidos los rendimientos financieros generados durante el tiempo que la señora MATILDE EUGENIA RICARDO GARCÍA permaneció afiliada a esta AFP, por lo que es desacertada la decisión de orden que PORVENIR S.A. se devuelvan a COLPENSIONES los referidos rendimientos y por tal razón este aspecto de la sentencia del *a quo*, será revocado, para en su lugar disponer que la devoción que debe realizar PORVENIR S.A. a COLPENSIONES, es los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el porcentaje de las cotizaciones, que no fue consignado en la cuenta de ahorro pensional de la actora, durante el tiempo que estuvo afiliada a estas AFP.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA, y ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

Sin costas en esta instancia por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación de COLPENSIONES y de PORVENIR S.A.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales **SEGUNDO** y **TERCERO** de la sentencia del 15 de diciembre de 2021 proferida por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MATILDE EUGENIA RICARDO GARCÍA** contra **COLPENSIONES, PORVENIR S.A.** y **PROTECCIÓN S.A.** en el sentido que PROTECCIÓN S.A., debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como indexados los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

Igualmente se PRECISA que la AFP PORVENIR S.A. debe devolver a COLPENSIONES indexados los porcentajes que en su momento descontó de las cotizaciones de la demandante durante el tiempo en que esta estuvo vinculada a esta AFP, referente gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima.

En lo demás se CONFIRMA la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c7c7b31091a05de566eb929c4b4ff153025967f3bdfc36774ada2dcba23bb3f6**

Documento generado en 09/02/2023 02:16:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>